

Opinión

El necesario pragmatismo económico



Renato Segura
Economista
y académico
UTFSM

Para quienes entienden algo de economía, saben que toda acción tiene un costo. Por tanto, para la sostenibilidad de dichas acciones, se requiere dimensionar las consecuencias económicas involucradas, a saber: Cuál es el costo, quién lo paga y cómo se paga.

Desde la perspectiva de la evolución que ha experimentado el ser humano, se puede inferir que el beneficio generado por la mayoría de las decisiones ha sido mayor al costo involucrado. Sin embargo, existen excepciones. Los países subdesarrollados o que enfrentan los mayores padecimientos de su población, han omitido dicho pragmatismo económico. En este sentido, quienes toman la decisión, se han dejado llevar por el idealismo o el dogma o han privilegiado el interés particular por sobre el interés general de la nación.

Una de las grandes fallas del sistema democrático, por ejemplo, es la posibilidad de utilizar la desinformación de los electores para atraer las preferencias en el voto. Las coaliciones que buscan el triunfo centran sus esfuerzos en ganar el voto en una población que desconoce la real sostenibilidad de las medidas que prometen los programas de gobierno.

En los países que han caído de manera sistémica en esta trampa, perpetúan un sistema democrático que cultiva miseria y opresión.

El avance en ciencia y tecnología tampoco ha estado exento a esta realidad. Los descubrimientos de la física cuántica, por ejemplo, han generado costos enormes los cuales ponen en riesgo la vida en el planeta. Quienes participaron en el desarrollo científico que hizo posible la bomba atómica no se imaginaron que abrían la puerta al mismísimo infierno.

En el ámbito de la política pública, el costo económico de las malas decisiones también se manifiesta de manera brutal. Es el caso del proyecto Transantiago, donde la decisión de cambiar el sistema de transporte público en la Región Metropolitana tuvo un costo equivalente a los recursos que se necesitan para atender a 3 millones de personas que esperan recibir atención médica en el sistema de salud pública en Chile.

Esta distorsión de la realidad surge debido a que los costos cargados al bolsillo ajeno son mucho más fáciles de sobrellevar que los costos en el bolsillo propio. Al menos, esta lógica es válida en el corto plazo. Sin embargo, tarde

o temprano, las malas decisiones con recursos ajenos –o propios– tendrán un efecto boomerang. Por eso es vital que las decisiones de política pública, en cualquier nivel que se materialicen, consideren reunir la suficiente información para evitar que lo que se pensaba era un gran negocio social, se transforme en una carga para los supuestos beneficiarios.

Chile, como pocas veces en su historia, durante el presente siglo se embarcó en una vorágine de reformas y barreras infranqueables para la inversión extranjera, cuyos impulsores no han reparado en el costo que ello significa. Se ha omitido la información disponible, dando paso a la búsqueda de cambiar lo establecido en ausencia de una propuesta sostenible que permita asegurar que los beneficios esperados superen a los costos involucrados.

El pragmatismo económico ha estado peligrosamente ausente en el discurso de muchos de los agentes responsables del diseño y la aplicación de las políticas públicas. Sería una tragedia pasar a la historia como la generación que destruyó un modelo económico que estuvo a pasos de transformar a Chile en un país desarrollado.